



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

El papel de las relaciones laborales ante la violencia de género

Autor/es

GONZALO PALACIOS OCÓN

Director/es

SERGIO ANDRÉS CABELLO

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Departamento

CIENCIAS HUMANAS

Curso académico

2018-19



El papel de las relaciones laborales ante la violencia de género, de GONZALO PALACIOS OCÓN

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

© El autor, 2019

© Universidad de La Rioja, 2019

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

**EL PAPEL DE LAS RELACIONES LABORALES
ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO**
(THE ROLE OF LABOR RELATIONS IN THE FACE OF GENDER VIOLENCE)

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Trabajo de fin de Grado

Presentado por: Gonzalo Palacios Ocón

Tutelado por: Sergio Andrés Cabello

Junio 2019

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Metodología	8
3. Conceptualización y marco teórico	9
3.1. El concepto relaciones laborales	10
3.2. Múltiples acepciones para la violencia de género	11
3.3. Modalidades de violencia de género	15
3.3.1. Violencia de género en los medios de comunicación	16
3.3.2. Violencia de control	17
3.3.3. Violencia física, sexual y psicológica	18
3.4. Diferentes víctimas de la violencia de género	19
3.5. Ciclo de la violencia	21
4. Evolución de la violencia de género y normativa vinculada	23
4.1. Perspectiva histórica de la violencia de género	23
4.2. Marco legislativo de aplicación directa	25
4.2.1. Referencia al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género	29
4.3. Derechos genéricos de las víctimas	31
5. El papel de las relaciones laborales con las víctimas	33
6. Conciliación laboral, derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social	35
7. Itinerario de las víctimas de violencia de género	38
7.1. Primeros pasos en el proceso	38
7.2. Vicisitudes del proceso en el ámbito laboral	40
7.3. Nuevas líneas de actuación	42
8. Conclusiones	44
9. Bibliografía	48
10. Anexos	52

RESUMEN

Mediante la confección de este trabajo se ha tratado de visibilizar la situación laboral que padece el colectivo de mujeres víctimas de violencia de género, efectuando una recopilación de las diferentes medidas implementadas por las instituciones para facilitar su incorporación o permanencia en el mercado laboral. La argumentación se basa de una forma más concreta en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y para su realización se han llevado a cabo varias entrevistas personales con los representantes de diferentes organismos. En el estudio se recoge un acercamiento histórico del problema, algunas breves consideraciones acerca del ciclo de la violencia, un recopilatorio de la normativa vinculada con la cuestión, y también algunas de las medidas aprobadas para intentar soliviantar las difíciles situaciones a las que se enfrentan las víctimas de esta lacra social. Las conclusiones obtenidas determinan una mayor implicación del sistema educativo acerca de la concepción de igualdad de género, la necesidad de una mayor dotación económica para ejecutar con efectividad las medidas de protección de las víctimas y, sobre todo, una concienciación social acerca de la necesidad de visibilizar estas situaciones mediante su denuncia.

ABSTRACT

Through the preparation of this work, we have tried to make visible the labor situation suffered by the group of women victims of gender violence, making a compilation of the different measures implemented by the institutions to facilitate their permanence in the labor market. The argumentation is based in a more concrete way in the territorial scope of the Autonomous Community of La Rioja, and for its realization several personal interviews have been carried out with the representatives of different organisms. The study includes a historical approach to the problem, some brief considerations about the cycle of violence, a compilation of the regulations related to the issue, and also some of the measures approved to try to resolve the difficult situations faced by the victims. victims of this social scourge. The conclusions obtained determine a greater involvement of the educational system regarding the conception of gender equality, the need for a greater economic endowment to effectively execute the protection measures for victims and, above all, a social awareness about the need to make these situations visible through their denunciation.

PALABRAS CLAVE

Relaciones laborales, violencia de género, ciclo de la violencia, roles sexuales, desigualdad laboral.

KEYWORDS

Labor relations, gender violence, cycle of violence, sexual roles, labor inequality.

1. INTRODUCCIÓN

La gradual incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, sobre todo en el último tercio del siglo XX, ha traído consigo multitud de necesidades de reestructuración organizativa para las empresas y para los diferentes organismos públicos. No solo eso, sino que además ha resultado ser un importante condicionante para las unidades familiares en todas sus formas. Con el fin de integrar esta nueva fuerza de trabajo, todas estas estructuras se han visto obligadas a reinventarse de una forma radical, tratando de readaptarse a las nuevas necesidades del mercado.

Recorrer este camino no ha sido algo fácil para ellas, quienes a lo largo de la historia han visto continuamente ninguneadas la mayoría de sus reivindicaciones acerca de la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la equiparación de salarios respecto al género masculino, los denominados techos de cristal relacionados con la ocupación de los puestos más altos, y otras formas de discriminación que, lamentablemente, perduran en la actualidad. No en vano, persiste en la sociedad actual una forma de dominación ancestral con base en el sistema patriarcal, a través del cual, los hombres son considerados como los sustentadores del hogar, la figura social de la familia o los encargados de mantener el estatus quo de la unidad familiar, mientras que las mujeres tienen asignados unos roles de género enfocados a las tareas de procreación y cuidados dentro del núcleo de la familia.

En la empresa, y en el mercado laboral, sucede prácticamente lo mismo: el género masculino ocupa los puestos más altos de las empresas (y de los organismos públicos), los empleos en sectores con mejores remuneraciones, los trabajos con menor precariedad, flexibilidad o temporalidad, etc., mientras que los puestos ocupados por mujeres se relacionan con trabajos vinculados con la crianza de los hijos o los cuidados familiares, que tienen menor reconocimiento social, peores condiciones laborales y salarios inferiores que los ocupados por los primeros.

Estos fenómenos son objeto de multitud de estudios culturales, económicos o sociales, si bien, en los últimos años, han ganado mayor presencia estas investigaciones. Además, se da la circunstancia de que, desde la perspectiva de las relaciones laborales, pudiera fomentarse en gran medida la concienciación sobre la igualdad de género con más ímpetu, pues la vinculación social entre las personas se materializa con mucha consistencia en las relaciones informales propias del puesto de trabajo.

Estrechamente relacionado con estas desigualdades, si bien en un plano de superior nivel, se encuentra la manifestación más perversa de las diferencias entre ambos sexos: la violencia de género. Este problema se ha consolidado en nuestra sociedad con el paso de los años, por lo que desde diferentes dimensiones se ha debido legislar al respecto para tratar, cuando menos, de controlar este fenómeno estructural.

En este sentido, el papel que deben jugar las relaciones laborales se torna fundamental a la hora de empoderar a las mujeres, con el fin de tratar de hacer desaparecer estas diferencias de género, no sólo proporcionándoles capacidad económica que permita una mayor independencia, sino mucho más allá, aportando altos niveles de autorrealización personal y profesional, características clave en los trabajadores de cualquier país desarrollado. (Martínez Yáñez 2012)

Como veremos en este trabajo, a pesar de haberse incrementado el número de casos de violencia de género, los organismos oficiales lo vinculan a una mayor denuncia de las situaciones de maltrato, lo cual deja entrever una mayor concienciación social del problema. Estamos en un momento histórico en el que sin lugar a dudas existe una mayor implicación social, institucional y legal al respecto, en el que se fomenta la denuncia pública y se “sugestiona” a las víctimas para que acudan a denunciar a sus agresores, lo que se traduce en una mayor visibilidad de los innumerables casos que, hasta el momento, habían quedado encuadrados dentro de las cifras ocultas y, por lo tanto, fuera de las estadísticas.

Se ha establecido como objetivo principal el estudio de las diferentes medidas adoptadas en el ámbito laboral en relación con las víctimas de violencia de género, cuestionando su efectividad y tratando de comprobar si son suficientes para facilitar a las víctimas su permanencia en el mercado laboral, o si ayudan en el acceso a un primer empleo. También se ha incluido un acercamiento histórico de la violencia de género, algunas de las medidas aplicadas en nuestra comunidad y unas conclusiones acerca de los principales problemas encontrados.

Los objetivos secundarios de este trabajo son: la recopilación de la diversa normativa vinculada con este tipo de violencia, las diferentes ayudas que se les facilitan a las víctimas y la comprobación del nivel de coordinación existente entre los diferentes organismos e instituciones que guardan relación con la materia.

Además, se ha establecido como hipótesis previa la existencia de una relación directa entre el acceso, la permanencia y el abandono del mercado laboral, y la condición de víctima de violencia de género. En concordancia, también se ha estipulado la hipótesis basada en que la permanencia en el mercado laboral resulta determinante a la hora de empoderar a las víctimas, ayudando a mejorar la situación general de su vida cotidiana en todas sus dimensiones.

2. METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo de carácter exploratorio, se ha utilizado una metodología basada en un análisis cualitativo y de triangulación. En este sentido, los resultados y conclusiones extraídos siempre deben ser considerados desde una perspectiva de aproximación a la realidad.

Por lo tanto, el fin último de esta investigación es aportar una visión general de la materia tratada, desde un punto de vista que constituye una realidad sobre el ámbito de las relaciones laborales y la violencia de género.

Se han utilizado tanto fuentes primarias como secundarias. Si bien las primeras han servido principalmente para la realización de la investigación cualitativa, las otras pueden clasificarse en función de varios aspectos:

- En un primer grupo se puede encuadrar la consulta de literatura académica vinculada con el tema que se ha realizado, la cual ha sido introducida en varios apartados de este trabajo con el fin de facilitar un acercamiento a la materia propia del objeto de estudio.
- También hemos incorporado gran variedad de normativa y legislación relacionada con la violencia de género y las relaciones laborales, lo que nos ofrece una visión general del estado legal actual acerca del tema estudiado.
- Por último, a lo largo de toda la argumentación, se han ido introduciendo enlaces a sitios web de diversos organismos, medios de comunicación o instituciones, los cuales nos han parecido representativos a modo de indicadores.

En lo relativo al trabajo cualitativo, se han llevado a cabo siete entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado. Como ya se ha comentado con anterioridad, el trabajo en sí constituye un estudio de carácter exploratorio, en el que se han querido incorporar los argumentos discursivos y subjetivos de los entrevistados. El conjunto de la muestra, no probabilística, se ha seleccionado de entre los diversos entes institucionales y sociales vinculados con el objeto de estudio, teniendo en cuenta la relación directa de todos ellos con la violencia de género y las relaciones laborales.

3. CONCEPTUALIZACIÓN Y MARCO TEÓRICO

A lo largo de este capítulo trataremos de involucrarnos con mayor profundidad en el mundo de la violencia de género, procurando asentar algunos conceptos clave reiteradamente mal empleados por los medios de comunicación y por el público en general. Finalmente, consideraremos dicho fenómeno desde diferentes perspectivas, entre ellas, la vinculada con las relaciones laborales.

Estas deficiencias en el empleo de la terminología relacionada con la materia conllevan, en ocasiones, a la consideración de situaciones de violencia de género en casos que no son tal, o en otras circunstancias, induce a pensar que son víctimas de violencia de género algunas mujeres que no lo son. Incluso se llega a imputar la comisión de estos delitos a individuos que pudieran haber cometido otro ilícito penal diferente. Es decir, podría pensarse que es simplemente una deficiencia en la acepción, o un uso incorrecto de la terminología sin mayores repercusiones, sin embargo, se torna fundamental concretar lo más claramente posible la definición de violencia de género para, de esta manera, poder implementar las medidas necesarias en su tratamiento y determinación.

Para Simón (2009, p. 168) “el género es, por tanto, el elemento clave de este tipo de violencia, ya que el determinante de riesgo para padecerla es ser mujer o sentirse genéricamente mujer, y el origen lo encontramos en la legitimidad que el sistema patriarcal ofrece a los varones para creerse en posesión de una autoridad “natural” que les confiere un supuesto derecho a controlar y a dominar al género femenino, subordinándolo y objetificándolo, con la finalidad de convertirlo en un ser inferior para la obtención de una serie de privilegios a los varones. Asimismo, se trata de una violencia de tipo estructural que es a la vez una violencia sexista, porque discrimina a las mujeres convirtiéndolas en causa y objeto de esa violencia, y machista, porque arremete contra ellas para lograr su consentimiento.”

En este sentido, según se recoge en la exposición de motivos de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993: “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, (...)”

Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer (...)"¹.

En consecuencia, vamos a establecer las definiciones más importantes a efectos de este trabajo, y conseguir así hablar con propiedad acerca del fenómeno de la violencia de género.

3.1 El concepto relaciones laborales

A efectos de delimitar el enfoque de este trabajo, vamos a introducir someramente una definición del concepto de relaciones laborales. Así, después de investigar acerca de las innumerables definiciones asignadas por los distintos autores a este concepto indeterminado, se ha aceptado la aportada por Anne Trebilcock como la de mayor afinidad con este estudio:

“El término relaciones laborales (también se utiliza relaciones industriales), hace referencia al sistema en el que las empresas, los trabajadores y sus representantes y, directa o indirectamente, la Administración, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que rigen las relaciones de trabajo. Asimismo, alude al campo de estudio dedicado al análisis de dichas relaciones”².

Debido a las continuas reconversiones de los mercados laborales y de bienes y servicios, estas consideraciones acerca de una definición más o menos completa del término relaciones laborales debe entenderse como un concepto en continua reconversión, y no como una definición excluyente o estática. Por consiguiente, los principales actores implicados en el ámbito de las relaciones laborales se conforman como los trabajadores, sus representantes y los empleadores, incluyendo entre estos últimos a la Administración, la cual, mediante su participación directa a través de la aprobación de normativa, o indirecta como empleador, está inmersa en las relaciones laborales de carácter colectivo.

¹ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

² Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, *Enciclopedia de la OIT*. Recuperado de: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/21.pdf>

De esta manera, y según afirma la autora que veníamos diciendo:

“En un sistema de relaciones laborales se ponen en juego simultáneamente intereses públicos y privados. El Estado participa y su papel puede ser pasivo o activo según el país en cuestión.”³

Por último, hay que destacar que en esta definición también se incardinan implícitamente una serie de conceptos sociales y valores morales a los que no se hace mención expresa, pero que, sin duda alguna, se encuentran directamente vinculados con las relaciones laborales:

“En un sistema de relaciones laborales se incorporan valores sociales (p.ej. libertad de asociación, sentido de la solidaridad de grupo, búsqueda de la optimización de beneficios) y técnicas (p. ej. métodos de negociación, organización del trabajo, consulta y resolución de conflictos)”⁴.

Es decir, los trabajadores no pueden considerarse como meros factores productivos equiparables a otros como el capital o la maquinaria, puesto que el hecho de ser trabajadores no excluye su condición de persona cuando comienzan sus jornadas laborales. Por lo tanto, implícitamente, se debe considerar a los trabajadores en su vertiente laboral y, a su vez, en su condición de persona.

3.2 Múltiples acepciones para la violencia de género

Resulta llamativo que algo tan actual como es la violencia de género no tenga una definición consolidada y unánime para la sociedad en general, haciéndose uso incorrecto de este concepto en innumerables situaciones. Como consecuencia de ello, se ha entendido fundamental recurrir a la diferente normativa, tanto de derecho estatal como internacional, para poder establecer una definición válida dentro de un marco de referencia que consiga concretar dicho concepto a efectos de este trabajo.

³ Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, *Enciclopedia de la OIT*. Recuperado de: <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/21.pdf>

⁴ *Ibíd*em

Así, hemos recurrido a diversas fuentes internacionales, nacionales y autonómicas, a través de las cuales se ha ido redefiniendo este tipo de violencia con el fin de establecer los medios que pudieran hacerle frente.

En primer lugar, y ya en la exposición de motivos de la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reconocen los primeros principios ante lo que comienza a denominarse violencia contra la mujer, estableciéndose que: “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”⁵.

También queda patente dentro del mismo epígrafe la necesidad de definir este tipo de violencia contra la mujer, tratando así de asentar un primer axioma de validez internacional justificándolo en que “se requiere una definición clara y completa de la violencia contra la mujer, una formulación clara de los derechos que han de aplicarse a fin de lograr la eliminación de la violencia contra la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de asumir sus responsabilidades, y un compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la mujer”⁶.

Más adelante, ya en el artículo 1 de la citada Declaración, se concreta la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, y con posterioridad, en su artículo 2, se enumeran los actos que deberán considerarse como violencia contra la mujer, sin constituir dicha enumeración una lista restrictiva frente a otras posibles situaciones.

⁵ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

⁶ Ibídem

A estos efectos, “se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado.”⁷

Nos encontramos ante los cimientos normativos acerca de la consideración de las mujeres como posibles víctimas de un tipo concreto de violencia, la cual se manifiesta en su contra por la mera pertenencia al sexo femenino, si bien, toda esta Declaración, se asienta en principios de mayor envergadura como pueden ser los consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Tras la promulgación de dicha Declaración por parte de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1993, se ha ratificado innumerable normativa internacional y comunitaria estrechamente relacionada con la violencia de género, sin embargo, en todas estas nuevas normas no se ha hecho una referencia tan concreta acerca de la definición de este tipo delictivo.

Para poder encontrar una concepción más actual y concreta al respecto debemos esperar hasta diciembre de 2004, cuando en el ámbito nacional se aprueba en el Congreso de los Diputados, por unanimidad, la denominada Ley Orgánica de Medidas de Protección

⁷ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

Integral contra la Violencia de Género, en la cual la antiguamente llamada Violencia contra la Mujer pasa a denominarse de forma más específica Violencia de Género.

En este sentido, queda establecido en el artículo primero de dicha ley orgánica esta nueva concepción en los siguientes términos:

“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.

Gracias a esta nueva reconsideración acerca de la violencia contra las mujeres y su posterior reformulación como violencia de género, se establece una definición reconocida como la más válida para el empleo y tratamiento de dichas situaciones, sobre todo para su aplicación y tratamiento en el ámbito de los profesionales involucrados con la materia, como pueden ser los psicólogos, abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, etc.

Por consiguiente, y puesto que es esta la definición que el legislador ha establecido como correcta en nuestra normativa, vamos a considerar como buena para este trabajo la recogida en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para argumentar sobre el tema.

No obstante, a pesar de ser esta la definición legal acerca de la violencia de género, no podíamos obviar otras formulaciones que trascurren paralelamente y que además juegan un importantísimo papel en el ámbito de las relaciones laborales, pues este tipo de violencia sobre la mujer es mucho más, ya que esta abarca principalmente estos tres aspectos: la violencia por control, la violencia explícita y la violencia de mal ambiente.

La primera es una forma de control dentro de la pareja, basada en la coerción de la mujer y su vigilancia constante. La segunda son los supuestos de violencia verbal, física y sexual que todos asociamos más concretamente con la violencia de género.

En último lugar, nos encontramos también el concepto de violencia de género cuando se observan relaciones con mal ambiente, donde el hombre increpa constantemente a su pareja, la deja en mal lugar delante de terceras personas, o la denigra mediante el uso de comentarios arraigados en los roles sexuales, chistes con estereotipos machistas, etc.

Para finalizar, debemos ser conscientes del gran desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la enorme influencia directa que esto supone en innumerables relaciones de pareja, por lo que la definición que en este momento puede ser aceptada como válida, es posible que deba ser reformulada en un futuro cercano, no en vano, la violencia de género se refiere a todos los actos donde se discrimine, ignore, someta o subordine a cualquier mujer, independientemente del modo, del lugar o del momento en que se manifieste.

3.3 Modalidades de violencia de género

Como venimos diciendo en el apartado anterior, la violencia de género es básicamente aquella que se manifiesta sobre la mujer por el mero hecho de serlo, en cualquiera de sus vertientes o con independencia del resultado, del modo, o del lugar en el que se lleve a cabo.

Es un gran problema social presente, aún hoy día, en nuestro país y que supone decenas de feminicidios al año, así como también, el asesinato de las hijas e hijos de algunas de las mujeres víctimas.

Se trata de una violencia de carácter estructural, y en clave de género, por la que el varón, fruto de un proceso socializador enmarcado en un sistema patriarcal heteronormativo, se siente con un supuesto “derecho natural” de controlar y dominar al género femenino mediante su subordinación y objetificación, con el propósito de conseguir, mantener y/o reforzar una serie de privilegios (García Orts, 2018;46). Sin embargo, paralelamente se suceden varias formas de maltrato que conculcan varios de estos aspectos, por lo que trataremos de exponerlos brevemente a continuación.

3.3.1 Violencia de género en los medios de comunicación

La violencia de género debiera ser entendida desde un concepto más relacionado con el ámbito social de las personas, y no relacionarla únicamente con su esfera privada, al fin y al cabo, es un problema de carácter social y así se recoge en la normativa: “es todo ataque material y simbólico que afecta a su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física”⁸.

Por lo tanto, el papel de la publicidad en general, y de los medios de comunicación en particular, se torna fundamental a la hora de normalizar determinados comportamientos o roles sexuales que promueven la violencia machista, pudiendo constituir en sí mismos hechos punibles.

Para evitarlo, debiera eludirse el sensacionalismo, tratando de evitar situar el foco de la noticia en el victimario, al igual que sucede con el resto de los delitos, o no difundir comentarios del vecindario acerca de la sorpresa por la autoría de los hechos, o no tratar de justificar lo sucedido por encontrarse el autor influenciado por sustancias estupefacientes o bajo los efectos del alcohol, etc. (Alberdi y Matas, 2002, p.255)

Para finalizar, se ha considerado incluir en este apartado los medios electrónicos, y al respecto, la última modificación del Código Penal ha introducido nuevos tipos delictivos estrechamente relacionados con las amenazas, coacciones o abusos a través del uso de las tecnologías para la información, como son el “sexting” o el “grooming”, lo que nos acerca a la idea del grado de perfeccionamiento que conlleva el uso de las redes sociales.

Estas terribles implicaciones del uso de internet proporcionan, por un lado, un anonimato a los agresores que conlleva mayor facilidad para cometer los hechos, y por otro, una despersonalización de la víctima, lo que provoca en estas una falta de aislamiento frente a su agresor, incluso en los momentos de intimidad que antes no podían ser vulnerados por la inexistencia de las nuevas tecnologías de la comunicación. (Ruiz, 2014)

⁸ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

3.3.2. Violencia de control

Como se expondrá más adelante, prácticamente ningún caso de violencia de género comienza con agresiones físicas del maltratador o dependencia psicológica o económica de la víctima, sino que primeramente se denotan ciertos síntomas que aumentan progresivamente en el llamado ciclo de la violencia (Walker, 1979).

Podemos decir que la violencia por control es uno de los primeros peldaños de este ciclo, en el cual el hombre necesita conocer y controlar cada paso, y por supuesto cada relación social de su pareja. Para ello, coarta las actividades que la mujer realiza durante su día a día, sus relaciones sociales y familiares, e incluso la posibilidad de su progreso tanto académico como profesional, en detrimento del desarrollo personal de la mujer. (Lorente Acosta, 2001).

No obstante, los procesos de control que pueda ejercer el hombre sobre su pareja, y sobre sus hijos, son mucho más largos que los procesos en los que se produce la violencia de género propiamente dicha, pues continúan mucho más allá de la convivencia y de los trámites de separación, convirtiéndose en muchos casos en un problema crónico que estigmatiza a las víctimas el resto de sus vidas.

En este sentido, la huida de la violencia de género por parte de las mujeres suele ser hacia adelante, es decir, deciden poner distancia de por medio y acabar con la relación. Sin embargo, esta decisión no consigue terminar con la conducta delictiva de los agresores, y lo que es peor, en muchas ocasiones conlleva un agravamiento de las acciones de maltrato (Fernández 2015).

Por último, hay que destacar que la implicación directa del uso masivo de las redes sociales ha sido un impulso exponencial en el control de las mujeres a través del teléfono móvil por parte de sus maltratadores, y cada vez es más frecuente que las víctimas aporten diferentes medios de prueba que son admitidos en juicio vinculados con dichas redes sociales, como pueden ser mensajes en Whats App, comentarios en Facebook, o imágenes en Instagram, etc.⁹

⁹ Fuente: Fundación Mujeres. *Observatorio de la violencia de género* (2005). Disponible en: <http://observatorioviolencia.org/el-uso-de-las-redes-sociales-como-forma-de-violencia-machista/>

3.3.3. Violencia física, sexual y psicológica

Habitualmente, cuando se habla de la violencia de género todos nos imaginamos situaciones incluidas en cualquiera de estas tres vertientes y, sin lugar a duda, estas son las formas más comunes en cuanto a la manifestación de la violencia contra las mujeres se refiere.

La violencia física podemos entenderla como aquella ejercida mediante acciones dolosas, capaz de producir un resultado lesivo en la víctima con independencia de la gravedad de las lesiones, o aquella que provoque un menoscabo o se convierta en una enfermedad. Estos ilícitos se encuentran tipificados en la Ley de Violencia de Género, mientras que, en el artículo 148 de nuestro Código Penal se entiende como agravante el hecho de ser cometida contra la esposa actual o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Las formas de detección más comunes en las víctimas son golpes de todo tipo, patadas, luxaciones, arañazos, marcas de presión, mordeduras, empujones, cortes, quemaduras...

Para determinados autores la violencia sexual constituye una manifestación concreta de la violencia física, mientras que para otros se trata de una forma de violencia con características propias. Independientemente de la consideración que se otorgue, a efectos de este trabajo podemos establecer este tipo de violencia como cualquier acto que atente contra la libertad sexual de la víctima, entre los que se encuentran la realización de actos sexuales contra la voluntad de la mujer, la obligación a la gestación o al aborto, la violencia en el acto sexual, etc.

En realidad, el fin último de la violencia física es causar en la víctima un impacto psicológico o emocional, tratando de conseguir con ello un control psicológico mediante el uso de la fuerza. Por lo tanto, la violencia psicológica se encuentra relacionada con una serie de comportamientos hostiles que perjudican la estabilidad emocional de la víctima. Esta forma de maltrato constituye la de mayor perdurabilidad en el tiempo, incluso puede durar más allá de la propia relación, y los estigmas en las víctimas directas o indirectas son de muy difícil reparación, pues afecta directamente a la autoestima de las mujeres y les provoca sensaciones de ansiedad y depresión constante. Además, este tipo de violencia es difícil de demostrar y de detectar por la propia víctima, pues esta no las considera malos tratos, sino manifestaciones del carácter del agresor.

Insultos, coacciones, chantaje, aislamiento social, amenazas, control económico, eliminación de la autoestima, sometimiento sexual, etc. son diversas manifestaciones de este tipo vejaciones, las cuales conforman los primeros indicios de la violencia de género, y constituyen unos malos tratos psicológicos que suelen quedar impunes por falta de pruebas.

3.4. Diferentes víctimas de la violencia de género

Una de las características que más inconvenientes presenta a la hora de desarrollar medidas específicas contra la violencia de género es el carácter estructural que esta tiene dentro de nuestra sociedad. El hecho de que se reproduzca en cualquier estrato social, condición socioeconómica y con independencia de la profesión del agresor y de la víctima, implica grandes dificultades a la hora de promover planes de control enfocados en una dirección que obtenga buenos resultados.

Desde la perspectiva de las víctimas aún se presentan más contingencias de difícil tratamiento, pues si hasta ahora habíamos considerado a las mujeres como las únicas perjudicadas en estas situaciones, no podemos dejar de lado a todas las personas que se ven involucradas durante la sucesión de estos procesos, los cuales suelen prolongarse en el tiempo y estigmatizar a multitud de individuos relacionados con el problema para el resto de sus vidas.

Por lo tanto, está claro que las víctimas principales sobre las que se manifiesta con toda su virulencia la violencia de género son las mujeres, especialmente aquellas que la padecen de manos de la que es, o ha sido, su pareja, pues se trata de un tipo de violencia recibida por parte de alguien en quien se confía plenamente y se elige de forma personal.

En innumerables ocasiones, ante episodios de violencia de género se producen huellas psicológicas de difícil reparación en las víctimas, debido sobre todo a sentimientos de autoinculpación por lo sucedido. En este sentido, debido al sentimiento de culpa, muchas mujeres continúan la relación con su maltratador a pesar de estar recibiendo palizas continuamente, más aún si el núcleo familiar es amplio y la mujer no tiene independencia económica.

No obstante, también debemos considerar como víctimas al resto de familiares y allegados, tanto de la víctima como del agresor, que conviven o conocen la situación de violencia de género, como pueden ser los niños, los familiares cercanos, los vecinos, los compañeros de trabajo, etc.

Entre todos ellos, los más afectados son aquellos que conviven diariamente con los episodios de violencia, es decir, como norma general los niños. Numerosos estudios han constatado otra forma de victimización secundaria en los descendientes: el llamado síndrome de alineación monoparental (Gardner, 1991).

Mediante este síndrome los hijos se posicionan del lado de uno de los progenitores, y ello conlleva falta de credibilidad hacia ellos por parte de la sociedad, aunque sean víctimas de violencia de género. Para Fernández (2015), tanto a nivel social como a nivel institucional, cuando la víctima y los hijos cuestionan al padre debería atenderse rápidamente esta circunstancia, pues puede resultar un indicativo de violencia en alguna de sus etapas.

En definitiva, la sociedad y la educación constituyen sistemas importantes ante una mitigación del problema, pero la familia juega un papel fundamental ante estas situaciones, bien sea desde el punto de vista de ayuda a las víctimas, como denunciante de las agresiones, como apoyo psicológico o económico a los perjudicados, etc., y son ellos quienes padecen en mayor grado las situaciones de violencia de género. Además, no debemos olvidar que la ruptura sentimental no pone fin a los procesos de maltrato, sino que, en muchas ocasiones los agrava.

Por último, existen determinados colectivos que pueden padecer una doble, o incluso triple discriminación, como pueden ser las menores, sobre todo aquellas con bajo poder socioeconómico, falta de información o problemas familiares; las mujeres discapacitadas, con dificultades en acceso a recursos de ayuda o debido a un mayor ocultamiento del problema; las inmigrantes en situación irregular en nuestro país; las jubiladas, colectivo con alto índice de vulnerabilidad en el plano psicológico, debido a su residencia en el mundo rural, a la educación y a la socialización en la que fueron instruidas.

3.5. Ciclo de la violencia

A pesar de existir diversas teorías acerca de las etapas por las que se va sucediendo el proceso de violencia de género, las más aceptadas consideran que se trata de un proceso compuesto por tres fases. Es lo que actualmente se conoce como ciclo de la violencia (Walker, 1979).

En primer lugar, se encuentra la fase de tensión, donde se manifiesta la agresividad del hombre frente a la mujer mediante el desencadenamiento de sentimientos como la ira, la provocación o los celos, existiendo además agresiones verbales y/o físicas de forma aislada, a la vez que se va aumentando la tensión paulatinamente.

A continuación, llega la fase de agresión aguda, en la cual se produce una descarga sin control de las tensiones acumuladas, con la sucesión de amenazas, patadas, golpes, abusos sexuales e incluso el uso de armas. En este punto, la mayoría de las mujeres no solicitan ayuda de forma rápida, sino que tienen tendencia a aislarse y negar los hechos tratando de minimizarlos, a menos que estos sean de tal gravedad que sea necesaria la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de los servicios de emergencia.

Por último, se reconoce claramente un ciclo de reconciliación, donde el maltratador niega los actos en los que ha incurrido, suele pedir perdón a la víctima prometiendo que no volverán a repetirse los episodios anteriores, muestra actitudes de arrepentimiento y finaliza con la llamada “luna de miel”, consistente en una reconciliación de la pareja.

Lejos de cerrarse el círculo, y por lo tanto finalizar las actitudes de maltrato, el ciclo vuelve a repetirse en cada uno de sus episodios, si bien cada vez suele aumentar la intensidad de los abusos para cada fase. Esto es más evidente en las formas de violencia donde se encuentran las relaciones asimétricas de poder, cuando el miedo es la emoción básica que experimenta la víctima.

A pesar de que, desde fuera, pueda parecer irreal el hecho de que las víctimas sean capaces de soportar situaciones continuas de maltrato, incluso entre aquellas que ya han padecido antes episodios de violencia, hay numerosos estudios que establecen las causas más habituales por las que las mujeres aguantan dichas situaciones, entre las que se encuentran el miedo a su agresor y a la sociedad, el aislamiento al que ha sido sometida durante el proceso, la dependencia económica, los hijos, el temor ante juicios morales, las promesas

de cambio efectuadas por el agresor, la falta de recursos sociales, o los vínculos creados entre víctima y agresor.

Este ciclo de la violencia se manifiesta de forma muy clara en las relaciones de pareja que pasan por situaciones de malos tratos, y desde una perspectiva externa es algo que resulta muy visible.

Es necesario acabar con la cultura del silencio y del control (de móviles, de lugares frecuentados, de forma de vestir...), puesto que nada empieza con una paliza directamente, sino que se trata de una escalera por la que se va subiendo peldaño a peldaño: un día te mira el móvil, al siguiente te dice cómo hay que vestir, luego te prohíbe relacionarte con determinadas personas, un mal día te escarmienta con una bofetada, después te propina una paliza, etc. (Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Haro).

4. EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y NORMATIVA VINCULADA

La violencia de género no es en sí un fenómeno de nueva aparición en nuestra sociedad, sino que se tiene constancia de la sucesión de episodios de malos tratos desde hace siglos. Sin embargo, es difícil hablar de un problema que ha sido considerado históricamente como algo vinculado a la esfera privada de las relaciones de pareja, por lo que en este capítulo haremos un breve comentario acerca de la evolución por la que ha transcurrido el fenómeno y su consideración social.

Además, se llevará a cabo una enumeración de la diferente normativa que conforma el marco legislativo de aplicación más directa ante estas situaciones, así como un desglose de los derechos genéricos que asisten a las víctimas desde el momento que padecen algún episodio de violencia.

4.1. Perspectiva histórica de la violencia de género

Lamentablemente, la violencia de género no es un fenómeno de nueva aparición en nuestras sociedades, sino que lleva sucediéndose prácticamente desde los primeros asentamientos humanos, con la asignación de determinados roles a cada sexo. Sin embargo, el paso de ser considerada de una cuestión privada a un problema social sí puede considerarse relativamente reciente. Estos episodios han sido continuamente ocultados por la sociedad, consiguiendo estigmatizar al género femenino debido a la subordinación sufrida por las mujeres frente a los hombres, y al sentimiento de obediencia debida de éstas hacia los segundos.

Son conocidos los derechos que históricamente se atribuían en diversas culturas a los hombres sobre sus mujeres, desde la Antigüedad hasta prácticamente nuestros días¹⁰. Esto refleja lo relativamente reciente que son las reivindicaciones acerca de la igualdad entre ambos sexos, no en vano, en la España de los años sesenta, era preceptivo el permiso del cónyuge para que una mujer pudiera sacar dinero de un banco, o más próximo aún, los datos de los que se tiene constancia acerca de la violencia de género son relativamente recientes. Según la Delegación del Gobierno en La Rioja:

¹⁰ Fuente: Revista EUDMET. *Génesis y evolución histórica de la violencia de género: Contribuciones a las ciencias sociales* (2011). Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/cccss/11/ldpc.htm>

La Ley de protección integral de las víctimas contra la violencia de género es de diciembre de 2004, sin embargo, solamente existe registro de víctimas mortales desde 2003. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

Por consiguiente, la cultura del patriarcado establece situaciones de desigualdad de poder entre sexos, discriminando continuamente a las mujeres y supeditando a estas a la voluntad de sus cónyuges, costumbres que siguen haciéndose eco aun en nuestra sociedad. En este sentido, son innumerables las situaciones de doble victimización que padecen las víctimas debido a la falta de credibilidad a la hora de ir a denunciar situaciones de malos tratos, o en el momento de solicitar la acreditación de condición de víctima, o en la aceptación por parte de la propia familia cuando se pone en su conocimiento que se está pasando por un proceso de violencia de género (Velasco Portero, 2010).

Debemos recordar que, según la Declaración de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993, “(...) la violencia contra la mujer en la familia y en la sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia”.¹¹

Esta situación no ha llegado a su fin, y a pesar de que en la actualidad las cifras reales del problema no se conocen en su totalidad, ya que muchas mujeres no denuncian tales hechos; los índices existentes son indicadores de preocupación, pues cada vez se manifiesta en parejas más jóvenes, y esto queda patente en las entrevistas realizadas:

En La Rioja, me llama la atención que tanto la edad de la víctima como la del autor están disminuyendo, así en 2018 en relación con 2017 los presuntos agresores menores de 30 años se han incrementado un 26%. También se ha visto incrementado el número de denuncias, lo que nos hace pensar que la sociedad está cada vez más concienciada de que estamos ante un problema social, y no ante algo íntimo que debiera solucionarse en cada casa. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

¹¹ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

Estas cifras evidencian que la situación no evoluciona a mejor a medida que se consigue una mayor concienciación social, ni porque se proporcione una mayor información acerca del problema y sus soluciones, sino que están estancadas y asentadas dentro de nuestra sociedad¹².

En consecuencia, tal y como se indica desde la perspectiva de uno de nuestros informantes:

Partiendo de que estamos ante un problema social sustentado en una situación de desigualdad heredada a lo largo de la historia y la cultura, implica que el proceso para erradicar la violencia de género será largo, por lo que es obligatorio avanzar, en ningún caso ir hacia atrás o pararse, porque esto significaría en ambos casos retroceder en la lucha contra esta lacra. Atendiendo a las cifras de víctimas mortales, este 2019 está siendo tremendamente duro, pues a fecha de hoy, 23 de abril, casi se han duplicado las cifras de víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas (10 en 2018, 17 ya confirmadas y dos en investigación en 2019). Esto significa que toda la sociedad, instituciones, familias, entorno social, etc., debemos participar en la prevención y también en la protección de las víctimas. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

4.2 Marco legislativo de aplicación directa

Se ha creído de importancia introducir un marco normativo que recoja la legislación con una vinculación más directa con la violencia de género, en el que se advierte una nota fundamental en la vigente legislación: la evolución hacia adelante que ha sufrido dicha normativa a lo largo de la historia. Esta progresión se ha llevado a cabo a través de constantes modificaciones sustanciales de preceptos básicos, con la intención de conseguir la erradicación, o cuando menos la reducción, de los índices de violencia de género en las sociedades actuales.

¹² Fuente: Nuevecuatrouno (08/03/2019).

Disponible en: <https://nuevecuatrouno.com/2019/03/08/denuncias-violencia-genero-rioja-2018/>

Históricamente, se han ido sucediendo normas de reconocimiento de derechos hacia las personas que garantizaban libertades personales, como la libertad individual, la seguridad, la igualdad, etc. Sin embargo, estas normas han sido continuamente aplicadas, casi en exclusiva, al ámbito social de las relaciones conyugales, o lo que es lo mismo, no se han aplicado durante mucho tiempo al plano privado de las relaciones de pareja. (Martín Valverde, 2006)

Ya en el prólogo del Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, realizada en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, queda patente el constante reconocimiento histórico de las desigualdades entre sexos, por lo que el legislador redacta la siguiente enumeración de normas fundamentales donde se asientan los axiomas básicos para la defensa de la igualdad de derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos:

“...Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer;

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo;

Considerando que los Estados Partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos;”.¹³

Por lo tanto, entre otras normas internacionales que conforman los pilares básicos legislativos acerca de la igualdad de derechos y libertades entre hombres y mujeres, podemos enumerar las siguientes: Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer (1993), Manual de Naciones Unidas sobre legislación en

¹³ Fuente: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749>

materia de violencia contra la mujer (2012), Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011), Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Instrumento de ratificación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o el Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Dentro de la Unión Europea, cabe citar el Tratado de Constitución de la Unión Europea, artículos 2 y 3 vinculados con la eliminación de las desigualdades y promoción de la igualdad entre ambos sexos; la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que ratifica la prohibición de cualquier forma de discriminación por sexo; el Programa Daphne III aprobado en la Decisión 779/2007/EC, de 20 de Junio, del Parlamento Europeo, en el que se recoge el programa de acción comunitario para prevenir la violencia ejercida sobre la infancia y la mujer y proteger a las víctimas; y un largo etcétera de normas comunitarias de menor rango, que regulan u orientan a los Gobiernos acerca de la necesidad de promover las condiciones para que la libertad e igualdad de los individuos sean reales y efectivas, así como la necesidad de remover los obstáculos que dificulten la participación de todos los ciudadanos (y ciudadanas) en la vida política, económica, cultural y social.

Teniendo esto en cuenta, y más aún, atendiendo al precepto constitucional mediante el cual “... Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno” es razonable que en nuestro país exista amplia variedad de normativa en materia de violencia de género.¹⁴

De esta forma, la ley de desarrollo mediante la que se ha visto implementada esta normativa internacional a nuestro ordenamiento interno es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta norma jurídica se constituye como una herramienta esencial para la erradicación de la violencia sobre las mujeres; señala los objetivos a conseguir, así como las distintas medidas en educación, publicidad o sanidad; determina las funciones de los juzgados de violencia sobre la mujer; establece los delitos de violencia de género y sus sanciones, etc.

¹⁴ Fuente: Constitución Española (1978), artículo 96.1.

Disponible en: (<https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf>)

Entre otras, también podemos recoger diferentes normas, doctrina y jurisprudencia que regulan características relacionadas con la violencia de género dentro de nuestra legislación interna, como son: la Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección para las Víctimas de Violencia Doméstica, que pone en marcha esta importantísima medida para las mujeres víctimas de violencia de género y determina el procedimiento a seguir; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; el Real Decreto 1917/2008 de 21 de noviembre, por el que se regula el programa de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género; la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que refuerza el nivel de protección de las víctimas; Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género; la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito; el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la citada ley orgánica 1/2004; la ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, que modifica la Ley General de Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas; la sentencia 59/2008, de 14 de mayo, del Tribunal Constitucional, que aclara la posible inconstitucionalidad de la LO 1/2004; los diferentes Protocolos de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o la guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género (Consejo General del Poder Judicial, 2013).

Además, de manera subsidiaria, diversa normativa establece diferentes preceptos que guardan estrecha relación con el tema que nos ocupa, como por ejemplo lo recogido en el artículo 64 de la ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, en el que se establecen los supuestos excluidos de negociación previa a la vía judicial, entre los cuales se encuentran aquellos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.

Por último, si nos centramos en el ámbito regional, diversa normativa ha tratado de adaptar las necesidades de nuestra comunidad en lo relativo a la violencia de género, como por ejemplo la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja, que tal y como recoge en su artículo 1: “(...) tiene por objeto la adopción de medidas integrales y globalizadoras para la

sensibilización, prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer y la ejercida en los ámbitos intrafamiliar y escolar. Asimismo, es objeto de esta ley el establecimiento de un eficiente y coordinado sistema de asistencia a las víctimas y a sus hijos, o a otras personas dependientes de ellas, víctimas directas e indirectas, que garantice acciones, asistencia, detección, protección y recuperación de las mismas”; o también lo establecido en la Orden 2/2006, de 31 de marzo, por la que se regulan los itinerarios de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre.

4.2.1 Referencia al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género

Para finalizar este epígrafe, cabe una mención expresa del actual Pacto de Estado, el cual, con el fin de identificar y analizar los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, fue ratificado por las distintas administraciones en diciembre de 2017, considerando que: “la eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere una actuación unitaria y la máxima coordinación, colaboración y cooperación, siempre desde el respeto al régimen de distribución competencial, en todas las acciones que se desarrollen puesto que el trabajo que se realiza para conseguir su erradicación implica a multitud de agentes, tanto desde el sector público como desde el privado. La violencia de género es un problema de la sociedad en su conjunto, por lo que toda ella tiene que involucrarse en la búsqueda de soluciones eficaces para proteger a las víctimas, así como a sus hijas e hijos, rechazar a los maltratadores y prevenir la violencia”¹⁵

En dicho Pacto de Estado se incluyen unos Ejes de actuación que están centrados en la ejecución de varias de las siguientes medidas:

1. Acciones dirigidas a la sensibilización de la sociedad y a la concienciación acerca de la existencia del problema.
2. Aumento de coordinación institucional que perfeccione los protocolos de actuación.
3. Mejora de la asistencia en los centros sanitarios y en los planes de inserción laboral.

¹⁵ Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e igualdad. Disponible en: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf

4. Mayor asistencia y protección a los menores y su reconocimiento como víctimas directas.
5. Formación de los profesionales implicados: jueces, médicos, personal docente, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.
6. Mejora del conocimiento global del problema, con seguimientos estadísticos periódicos.
7. Recomendaciones a administraciones e instituciones vinculados en materia de violencia de género.
8. La visualización de otras formas de violencia contra las mujeres como la violencia sexual, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital, etc.
9. Adquisición de un compromiso económico para la ejecución de medidas destinadas a la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Así, en 2018 se destinaron 159,5 millones de euros a la causa, cantidad que ha sido prorrogada para el ejercicio 2019.¹⁶
10. El seguimiento del Pacto a través de la Comisión de Seguimiento para su evaluación.

Mediante la implementación de estas medidas, el Gobierno ha tratado de eliminar, o cuando menos controlar, la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas, intentando sensibilizar y concienciar a la sociedad al respecto, tal y como nos han comentado desde la Delegación del Gobierno en La Rioja:

Es de destacar que, tanto en el Senado como en el Parlamento, se ha aprobado un Pacto de Estado contra la Violencia de Género sin ningún voto en contra, a través del cual se pretende, entre otras propuestas, prevenir, sensibilizar y hacer una protección integral psicosocial e individualizada de las víctimas de violencia de género. En definitiva, estamos pues hablando de solidaridad, de compromiso social, de un problema de Estado, ya que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

¹⁶ Fuente: Presupuestos Generales del Estado (2018). Recuperado el 25/05/2019. Disponible en: http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2018Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/1/24/2/1/N_18P_E_R_31_125_1_1_1_1232C_2.PDF

4.3 Derechos genéricos de las víctimas

Si bien las víctimas de este tipo de violencia también son titulares de determinados derechos por haber padecido un delito, como puede ser el derecho a formular denuncia y a obtener información, el derecho a mostrarse parte en el proceso penal, o el derecho a la restitución de la cosa y la reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados, el hecho determinante a la hora de reivindicar los derechos reconocidos a las víctimas de violencia de género, y además una de las cuestiones más polémicas en el tratamiento del problema, es la propia consideración de víctima a efectos legales.

En este sentido, la declaración de víctima de violencia de género puede efectuarse por tres vías: la vía judicial mediante sentencia firme, la declaración de una orden de protección a la víctima, o mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.

Una vez que se ha realizado dicha declaración, y como no podría ser de otra manera, todas las mujeres tienen inherentes una serie de derechos, como los recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o cualquiera de los reconocidos como derechos y libertades propios de las personas. Como consecuencia, y tal y como ya se ha enunciado en apartados anteriores, una primera enumeración acerca de los preceptos involucrados directamente con las mujeres es la efectuada en la Declaración de la ONU de 1993, que en su artículo 3 establece que: “la mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad (...)”.¹⁷

De manera más alineada con la violencia de género, las víctimas también poseen una serie de derechos recogidos en la Ley Orgánica 1/2004 que son agrupados en cuatro bloques: el derecho a la información, a la asistencia social y a la asistencia jurídica gratuita; los derechos de las funcionarias públicas; los derechos económicos y los derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. Al respecto, y dejando a un lado estos últimos pues serán tratados más adelante, podemos enunciar más concretamente algunos de estos derechos:

¹⁷ Fuente: Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (20/12/1993). Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx>

1. Derecho a la información, a efectos de recibir asesoramiento de los servicios públicos.
2. Derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, comprendiendo aquí los recursos de diferentes alojamientos.
3. El derecho a la asistencia jurídica inmediata y gratuita.
4. Derechos específicos de las trabajadoras de los distintos servicios públicos.
5. Derechos económicos para mujeres en situación de insuficiencias en su empleabilidad, o la renta activa de inserción en determinadas circunstancias (Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre).
6. Prioridad en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
7. Derecho a autorización de residencia temporal y trabajo para las víctimas extranjeras en situación irregular en nuestro país.
8. Derecho de residencia, trabajo y asilo para las víctimas que fueran además extranjeras.

En nuestro ámbito judicial más próximo, podemos encontrar sentencias como las dictadas por el Juzgado de lo Social N.º 2 de los de Logroño¹⁸, en la cual se reconoce la pensión de viudedad a favor de una víctima que consiguió acreditar, mediante sentencia firme, haber sido víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial. Esta sentencia, dictada en contra del criterio de la Tesorería General de la Seguridad Social, reconoce el derecho a la víctima a pesar de haber transcurrido unos 30 años desde que sucedieran los hechos, los cuales han podido acreditarse debido a la denuncia de la perjudicada en 1991.

¹⁸Sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Logroño, núm. Autos 349/2016, en materia de prestación por viudedad, de 23 de enero de 2017.

Sentencia del Juzgado de lo Social 2 de Logroño, núm. Autos 180/2018, en materia de prestación por viudedad, de 15 de octubre de 2018.

5. EL PAPEL DE LAS RELACIONES LABORALES CON LAS VÍCTIMAS

En la actualidad, la vida laboral de las personas y el resto de las dimensiones de su existencia transcurren de forma paralela. Esto determina una alta influencia en la socialización y la cultura de los individuos ejercida desde el ámbito laboral, hasta tal punto que es un claro condicionante a la hora de tomar decisiones existenciales. La fuerte correlación entre ambas circunstancias también se manifiesta cuando, además, se tiene en consideración la violencia de género, dejando entrever en multitud de ocasiones situaciones conflictivas relacionadas con esta materia.

Bien sea desde la perspectiva de las víctimas en sus diversas variantes, o como medio por el cual se vale el agresor para ejercer la violencia, o incluso en los casos en los que es el empresario quien se manifiesta como maltratador, las relaciones laborales se configuran como una de las áreas en las que más necesaria se torna la implicación con el problema, y en este sentido, gran variedad de instituciones y organismos vinculados al ámbito laboral se han involucrado en su tratamiento y consideración.

Podemos afirmar que, en la actualidad, la violencia de género se fundamenta en un reparto de roles dentro de la pareja que prepara a las mujeres para la aceptación del dominio masculino, haciéndoles creer que su vida y su existencia social se basa en la dependencia respecto de un hombre, bien sea psicológica, económica, afectiva, etc.¹⁹

No se encuentra en todas las parejas, sino que se manifiesta principalmente en las que la superioridad del hombre es incluso aceptada por la propia mujer, y más aún cuando el reparto de roles sexuales diferenciados está internalizado por ambos miembros de la pareja. Esta aceptación puede venir por el hecho de que el hombre sea el sustentador de la familia, ya que su trabajo está mejor valorado socialmente y con ello, mejor retribuido.

La consecuencia es que la mujer se encuentra subordinada a su pareja por la falta de recursos económicos propios a causa de la dedicación en exclusiva a la familia y al hogar, cumpliendo el rol de la buena esposa, que la hace más vulnerable, y dificulta en gran medida su incorporación al mercado laboral²⁰.

¹⁹ Fuente: Consejo General de la Abogacía Española. *Violencia de género y protección de la víctima en el derecho laboral* (28/05/2018). Recuperado el 25/05/2019. Disponible en: <https://www.abogacia.es/2018/05/28/violencia-de-genero-y-proteccion-de-la-victima-en-el-derecho-laboral/>

²⁰ Ibidem

Es por esta razón que uno de los objetivos de la mencionada protección integral de las víctimas de violencia de género sea garantizar su propia autonomía económica, ya que en muchos casos, la dependencia económica respecto de su agresor dificulta la salida de la situación de violencia, para lo cual, se articula una serie de medidas protectoras que no tienen que ver con la protección de su integridad física y psicológica en el puesto de trabajo, sino con su protección frente a agresiones externas o frente a la posible pérdida de su puesto de trabajo por no poder cumplir sus obligaciones laborales.

6. CONCILIACIÓN LABORAL, DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La evolución histórica en el ámbito laboral hacia la consideración de la violencia de género ha cristalizado en una serie de medidas estatutarias recogidas por el legislador en la diferente normativa vinculada con esta materia.

Además, también se ha entendido necesaria la negociación colectiva a la hora de desarrollar determinadas situaciones por las que atraviesan laboralmente las víctimas, si bien vamos a obviar esto último para el desarrollo de este trabajo por tratarse de algo muy específico de cada convenio, aunque no por ello poco importante.

Los siguientes preceptos, extraídos del vigente Estatuto de los Trabajadores, son los que hemos considerado más importantes, los cuales, a modo de resumen, vienen a estos extremos:

- **Art 37 ET DESCANSO SEMANAL, FIESTAS Y PERMISOS**

8. Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género tendrán derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo.

- **Art 40 ET MOVILIDAD GEOGRÁFICA**

4. Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde prestaban servicios, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros.

- **Art 45 ET CAUSAS Y EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN**

1. El contrato podrá suspenderse por las siguientes causas:

n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

- **Art 49 ET EXTINCIÓN DEL CONTRATO**

1. El contrato de trabajo se extinguirá:

n) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

- **Art 52 ET EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS**

El contrato podrá extinguirse:

d) Por faltas de asistencia al trabajo (...). No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias (...) motivadas por la situación derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales o por los servicios de Salud.

- **Art 53 ET FORMA Y EFECTOS DE LA EXTINCIÓN POR CAUSAS OBJETIVAS**

4. Será nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos:

b) (...) la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación.

- **Art 55 ET FORMA Y EFECTOS DEL DESPIDO DISCIPLINARIO**

5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Será también nulo el despido en los siguientes supuestos:

b) (...) y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación.

En cuanto a los derechos existentes para las víctimas en materia de Seguridad Social, estos se llevan a efecto con la aplicación de diferentes medidas:

1. Derechos en materia de cotización a la Seguridad Social, como la consideración de cotización efectiva ante suspensiones de trabajo relacionadas con la violencia de género (artículo 165 Ley General de la Seguridad Social), suspensión de la obligación

de cotizar a la Seguridad Social durante seis meses para hacer efectiva su protección y asistencia social integral (artículo 329 Ley General de la Seguridad Social), la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social (Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre).

2. Derechos en prestaciones a la Seguridad Social, como la consideración de situación asimilada al alta en determinadas circunstancias y a efectos de maternidad y paternidad (Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo), el reconocimiento de la pensión de jubilación anticipada como consecuencia de situaciones de violencia de género (artículo 207 Ley General de la Seguridad Social), el derecho a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o viudedad que acrediten los requisitos exigidos (artículo 220 de la misma norma), el impedimento en el reconocimiento de pensión a quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un homicidio cuando la víctima fuera o hubiera sido su pareja (artículo 231 de la citada ley), derecho a la prestación por desempleo cuando la trabajadora reúna los requisitos y extinga su contrato voluntariamente (artículo 267 Ley General de la Seguridad Social).
3. Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género, como bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, o inclusión dentro del programa “Empresas Solidarias” de la Comunidad Autónoma de La Rioja.²¹

²¹ Fuente: Página web del Gobierno de La Rioja. Club de Empresas Solidarias. Recuperado el (30/05/2019). Disponible en: <https://www.larioja.org/atencion-victimas/es/club-empresas-solidarias>

7. ITINERARIO DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En este apartado se pretende realizar un breve resumen del recorrido, relacionado con el ámbito laboral, por el cual trascurren las víctimas tras haber padecido una situación de violencia a manos de sus parejas o exparejas. Así, vamos a introducir las diferentes medidas y consideraciones que nos han sido facilitadas por los representantes de los organismos e instituciones a las que hemos entrevistado.

Para comenzar, debemos tener en cuenta que todo el proceso comienza después de haberse padecido por parte de la mujer una situación de violencia, con todos los condicionantes, estigmas o lesiones que ello conlleva a nivel físico y psicológico. El legislador ha considerado en profundidad este extremo en múltiples ocasiones, recogiendo en la diversa normativa vinculada con la violencia de género, la necesidad de personal con formación específica en el tratamiento de las víctimas, la obligación de un trato diferenciado de los involucrados con estas, el fomento de la empatía hacia las mismas, etc.

7.1 Primeros pasos en el proceso

En nuestra sociedad, las situaciones de maltrato pueden ser detectadas desde diferentes perspectivas, como puede ser desde la familia, los vecinos, los servicios sanitarios, las fuerzas de seguridad, etc. Siempre que no medie una causa de urgente necesidad en la que tengan que intervenir las fuerzas de seguridad y la asistencia sanitaria, el primer contacto que las víctimas tienen con la Administración se da a través de los Servicios Sociales, bien sea a través de los llamados Servicios Sociales de Base, o bien a través del Servicio Especializado propio de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de La Rioja.

Desde aquí procuramos asistir a las víctimas en los pasos que deben seguir para afrontar el problema, ofreciéndoles información acerca de las diferentes ayudas y servicios de los que pueden disponer. (Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de La Rioja).

Normalmente, cuando las víctimas pasan por aquí les han derivado desde la Oficina de la Víctima, por lo que les informamos de los diferentes programas de ayuda que hay a nivel local. (Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Haro).

Estamos pues ante una primera relación entre la víctima y los distintos entes vinculados con la violencia de género, por lo que se torna fundamental el tratamiento especializado hacia las mujeres que han padecido maltrato, así como un buen asesoramiento acerca de la cronología que deben seguir durante el proceso. De esta manera, desde los mencionados Servicios Sociales, las víctimas suelen ser derivadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que las primeras presenten la correspondiente denuncia de los hechos, si bien este paso no consiguen darlo todas ellas.

En muchas ocasiones la víctima no consigue denunciar al que es, o ha sido su pareja durante un tiempo, puesto que se sienten engañadas o incluso dependientes de él. La legislación insta a quien tenga conocimiento de una situación de maltrato a denunciarla, o a persuadir a las víctimas para que pongan la denuncia, sin embargo, es una decisión muy difícil de tomar. Con relativa habitualidad incluso hay víctimas que llegan a retirar denuncias después de haberlas formalizado. (Unidad de Convivencia y Familia de la Policía Local de Logroño).

Como venimos argumentando, la Administración prevé una serie de medidas en favor de las víctimas, si bien, para poder activar estas prestaciones, la legislación estima imprescindible la obtención de uno de los siguientes documentos, sin los cuales no podría solicitarse ayuda social o económica: una Orden de Protección, un informe del Ministerio Fiscal en el que se considere como tal a la solicitante, o la presentación de una sentencia firme que confirme los hechos.

Esta circunstancia provoca una doble victimización para las mujeres, pues deben volver a recordar las situaciones de maltrato a la hora de conseguir la documentación que acredite que son víctimas de violencia de género. Nosotros realizamos programas de ayuda como terapias grupales, acompañamientos a diversos organismos para que se sientan apoyadas, teléfonos de apoyo emocional y de urgencia, etc. (Red Vecinal contra la Violencia de Género).

7.2 Vicisitudes del proceso en el ámbito laboral

Normalmente, una vez que la mujer que hubiere padecido maltrato y estuviere en posesión de cualquiera de los documentos acreditativos de ser víctima de violencia de género, se da paso a informarle de las diferentes ayudas de las que dispone, tanto en el plano social, como en el laboral, en el económico, etc. Los derechos laborales de las mujeres que se encuentran activas ya han sido enunciados con anterioridad, por lo que nos centraremos a continuación en las víctimas en estado inactivo o desempleadas.

En este sentido, el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la ley orgánica 1/2004, de violencia de género, establece una ayuda a las víctimas que no tienen carácter de empleables, bien sea debido a la carencia de rentas que superen el setenta y cinco por ciento del Salario Mínimo Interprofesional, o bien porque estas presenten especiales dificultades para obtener un empleo, dada su condición de extranjeras que no conocen el idioma, por estar ya en una edad avanzada para trabajar, por falta de preparación general o circunstancias sociales, etc. Esto debe acreditarse mediante informe emitido por el Servicio Público de Empleo:

Hacemos una valoración inicial en la que determinamos si la víctima puede ser empleable o si, por el contrario, se encuentra en situación de inempleabilidad, pues las trayectorias son distintas. Si la víctima se encontrara entre estas últimas, se le reconoce una ayuda en forma de pago único equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, ampliable hasta veinticuatro meses más en función de responsabilidades familiares o minusvalías. (Servicio Público de Empleo)

En otro plano, con el fin de aportarles soluciones laborales a su situación, las víctimas que sí se consideran empleables son derivadas a los Servicios Públicos de Empleo. Así, a las mujeres que se encuentran desempleadas, se les incluye en un programa de inserción sociolaboral establecido por el Real Decreto 1917/2008, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, regulado por la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la ley orgánica 1/2004, de violencia de género, que incluye medidas tales como la introducción de las víctimas en itinerarios de inserción, inclusión en programas formativos, incentivos a víctimas y empresas para efectuar movilidad geográfica, convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas, etc.

En La Rioja tenemos una lista de Empresas Solidarias que facilitan la inserción laboral de las víctimas en el mundo laboral. Esto se gestiona desde la Oficina de Asistencia a la Víctima en coordinación con los Servicios de Empleo. (Red Vecinal contra la Violencia de Género).

En la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de La Rioja, trabajamos con la Orden 2/2006, de la Consejería de Servicios Sociales, que regula los itinerarios de inserción de las mujeres maltratadas. A través de ella, una vez que se puede acreditar la situación de víctima de violencia de género, y en el plazo de diez días desde que tenemos conocimiento, nos ponemos en contacto con la víctima para diagnosticar la situación. Después, si se considera que esta es empleable, se elabora un proyecto individualizado de inserción, independientemente del resto de prestaciones económicas que le correspondan. (Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de La Rioja).

Para apoyar aún en mayor medida a las víctimas, se viene ejecutando por parte de los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, en colaboración con el Servicio de Empleo Estatal, el programa Renta Activa de Inserción. Este programa está destinado a la inserción de determinados colectivos con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, y que se encuentren con necesidades económicas, como pueden ser las mujeres maltratadas.

Para ser beneficiarias de la Renta Activa de Inserción, las víctimas deben estar desempleadas, inscribirse como demandantes de empleo y suscribir el compromiso de actividad. Además, deberán ser menores de 65 años, no tener ingresos de más del setenta y cinco por ciento del Salario Mínimo Interprofesional y no haberse beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores. (Servicio Público de Empleo).

Una nota característica de las mujeres víctimas de violencia de género en relación con la Renta Activa de Inserción, es que además de la percepción de 430 euros mensuales durante 12 meses, con un máximo de tres solicitudes, pueden solicitar una ayuda suplementaria de tres mensualidades cuando se vean forzadas a cambiar su domicilio como consecuencia de alguna situación de malos tratos. (Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito de La Rioja).

Por último, como una de las partes más importantes del proceso, se realiza un seguimiento de autoevaluación por parte de la propia Administración, en el cual se plantean las líneas de mejora o los errores que se hayan podido cometer durante un periodo concreto.

En nuestra Comunidad, existe la Comisión Institucional de La Rioja para la Coordinación de Actuaciones de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia, en la que participamos diferentes organismos relacionados con esta materia, y celebramos reuniones con periodicidad variable según circunstancias determinadas. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

7.3 Nuevas líneas de actuación

En el tratamiento y control de la violencia de género en nuestro país, se ha estimado como fundamental por la propia ley orgánica que lo regula actuar de forma coordinada y conjunta por parte de los distintos entes implicados. Así, se entiende fundamental que los organismos de los que venimos hablando coordinen sus protocolos y planes de actuación para fijar una estrategia conjunta que alcance los objetivos deseados.

Otra, de entre las diversas funciones que tenemos, es la de colaborar y participar en mesas de coordinación con las administraciones autonómicas y locales en materia de lucha contra violencia sobre la mujer”. “En nuestra comunidad, existe la Comisión Institucional de La Rioja para la Coordinación de Actuaciones de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia en la que participamos diferentes Organismos relacionados con esta materia y celebramos reuniones con periodicidad variable según circunstancias determinadas. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

Aquí trabajamos en continua colaboración y coordinación con los Servicios Sociales de Base, con los que tenemos una comunicación muy fluida, con el Servicio Público de Empleo Estatal, con la Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito de La Rioja, y con las Entidades Colaboradoras con la

Dirección General de Empleo y Formación”. “No obstante, no siempre se cuenta con las herramientas y los procedimientos adecuados para la implementación de protocolos y, en ocasiones, se producen fallos o carencias como falta de apoyo social, o falta de apoyo a nivel familiar para que su situación no agrave las dificultades en la conciliación laboral y personal. Se trabaja en la adquisición de herramientas prelaborales, para búsqueda activa de empleo, y acceso a la Formación Ocupacional principalmente. (Servicio Público de Empleo).

Además, se ha estimado como medio de vital importancia en el tratamiento de este tipo de violencia el fomento de una educación en valores de igualdad, donde las personas sean conscientes, desde los primeros momentos de su vida en sociedad, de la necesidad de equiparar a ambos sexos en todas las situaciones.

Desde esta Oficina se imparten charlas en diferentes institutos a los alumnos de 1º y 3º de ESO, mediante las que se trata de transmitir la necesidad de un trato igualitario en género, haciendo hincapié en que las adolescentes se hagan respetar frente a sus compañeros y parejas. (Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de La Rioja).

Para concluir, también cabe citar que en la actualidad existe en la Comunidad Autónoma de La Rioja un listado de empresas implicadas en la consecución de una sociedad libre de este tipo de violencia, las cuales han firmado un convenio con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, a través del cual se desarrollan diversas actuaciones de sensibilización de la sociedad o de inserción de las víctimas.²²

Es importante que las empresas potencien y se impliquen en el programa Empresas por una sociedad libre de violencia de género, mediante el cual se comprometen a realizar acciones de sensibilización y prevención de la violencia, tanto destinadas a su propia plantilla, como dirigidas a sus proveedores y a su clientela. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

²² Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. *Empresas por una sociedad libre de violencia de género*. Disponible en: <http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/iniciativaEmpresas/home.htm>

8. CONCLUSIONES

Tras la realización de esta investigación exploratoria, hemos conseguido extraer unas conclusiones acerca del problema de la violencia de género desde varias dimensiones. Así, en el plano vinculado con las relaciones laborales, el más próximo a este trabajo, hemos comprobado que en la actualidad se destinan gran cantidad de recursos humanos, sociales y económicos al tratamiento integral de esta forma de violencia. Esto nos reporta una idea acerca del nivel de concienciación que las diferentes Administraciones Públicas tienen sobre un problema social, el cual se ha convertido en estructural con el paso de los años, y que se manifiesta prácticamente en su totalidad sobre las mujeres²³.

Tanto es así que, en las últimas reformas efectuadas en el Estatuto de los Trabajadores, el legislador se ha visto obligado a modificar determinados preceptos que guardan relación con la violencia de género en el ámbito laboral, teniendo en consideración el problema, y otorgándole una especial protección a las víctimas a través del reconocimiento de unos derechos laborales básicos.

La manifestación de estas situaciones de desigualdad en el ámbito laboral se concreta a través de distintos fenómenos, como la brecha de género, la baja tasa de actividad de las mujeres, el abandono del mercado de trabajo para dedicarse a trabajos de cuidados, la precariedad del empleo femenino, los techos de cristal y suelos pegajosos, y todas aquellas implicaciones de estereotipos de género mediante los que se promueve su discriminación en el mercado de trabajo. Por consiguiente, debieran tomarse decisiones drásticas por parte de los diferentes gobiernos en cuanto a la ejecución de medidas dirigidas a reducir la discriminación de las mujeres en nuestro país, bien sea mediante la elaboración de normas realmente eficaces tras su aprobación, bien sea a través de medidas de discriminación positiva, o bien a través de programas de educación de la ciudadanía en términos de igualdad.

Además, resulta muy importante tratar de implicar en mayor medida a los distintos agentes sociales con capacidad de negociación colectiva en el ámbito laboral, con el fin de desarrollar medidas encaminadas a la mejora de la situación de las víctimas, pues es escasa dicha implicación a la hora de negociar convenios colectivos y, en muchas

²³ Fuente: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e igualdad. Disponible en: http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf

ocasiones, se transcribe de forma literal lo que se recoge en la ley sin entrar a negociar posibles mejoras extraestatutarias en favor de quienes hubieren padecido violencia de género. (Argüelles Blanco y Fernández Villazón, 2016)

Hemos comprobado que también resulta fundamental la implicación de las instituciones en cuanto al fomento del acceso y permanencia al mercado laboral de las mujeres, pues constituye, no solo una reivindicación social por la igualdad, sino una forma de liberación sobre la posible dependencia económica, social, o de cualquier índole que los hombres pudieran ejercer sobre las mujeres en las relaciones de pareja. En este sentido, desde la Delegación del Gobierno en La Rioja nos aseguran que:

Así pues, la incorporación o continuidad de estas mujeres en el trabajo constituye un pilar básico a la hora de luchar contra su situación, ya que reporta numerosas ventajas al alejarlas no solo de su agresor, sino también al separarlas del ámbito familiar del maltrato y proporcionar independencia profesional y económica. (Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en La Rioja).

Bajo esta perspectiva, hemos encontrado alguna deficiencia en la Administración a la hora de interactuar con las víctimas, basadas fundamentalmente en la falta de formación específica del personal, la falta de recursos técnicos y humanos, la falta de sensibilización, o una alta burocratización en los trámites que despersonalizan un procedimiento que debiera ser tratado con especial delicadeza. En las distintas oficinas de empleo se hace patente este extremo:

Algunas medidas que pudieran tomarse pasan por dar formación específica a los técnicos encargados de la gestión de los procedimientos vinculados con la violencia de género, aumentar los recursos personales para una mejor atención personalizada o desarrollar sistemas que ayuden a un acompañamiento individual real de cada víctima. (Servicio Público de Empleo).

En cuanto al papel que juegan las relaciones laborales en relación con las víctimas de violencia de género, resulta de una importancia vital, puesto que no solo conlleva un empoderamiento del género femenino, y por lo tanto una independencia económica, sino que, además, ayuda a salir del ciclo de la violencia a las mujeres maltratadas mediante las implicaciones sociales que conllevan las relaciones informales en el puesto de trabajo.

Por consiguiente, debieran garantizarse e implementarse los derechos laborales y de Seguridad Social reconocidos actualmente, con el fin de seguir proporcionando a las víctimas una protección integral.

En estrecha relación con lo anterior, y puesto que las estadísticas arrojan referencias lamentables en cuanto al número de víctimas de violencia de género, quizá debiera valorarse la necesidad de formación especializada para técnicos de recursos humanos, jefes de personal o cualquier trabajador vinculado con el tratamiento de capital humano, al igual que se desarrollan programas específicos en otros campos como son la medicina general, los servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.

Sin lugar a duda, es en el ámbito laboral en uno de los que antes puede detectarse la victimización de las mujeres, bien sea por acudir al centro de trabajo con lesiones físicas o psicológicas, bien por la falta de rendimiento a consecuencia de estar pasando una “mala racha”, bien por haberse comentado las circunstancias personales con algún compañero, etc.

Todo ello resulta de vital importancia, pues en el puesto de trabajo se fomenta un buen clima para detectar las situaciones de maltrato, o resulta un lugar adecuado para superar la cultura del silencio con los compañeros. En un plano más genérico, se torna imprescindible la necesidad de educar a las nuevas generaciones en valores de igualdad, eliminando la socialización de género, así como los roles y estereotipos asignados a cada sexo, pues estos factores constituyen en sí el germen que propugna la violencia de género en nuestra sociedad.

Al mismo tiempo, debe impulsarse la concepción social de que no se trata de un simple problema familiar, sino de un delito tipificado en el Código Penal y, además, suponerse cierto desde el principio, evitando así nuevas victimizaciones entre los que han padecido un proceso de este tipo.

En cuanto al estado de la coordinación existente entre los diferentes organismos vinculados con este fenómeno, hemos podido comprobar que existe un nivel fluido de comunicación, a pesar de que, como se nos ha dado a conocer:

La coordinación sigue funcionando en mucha mayor medida a nivel personal que a nivel institucional, es decir, depende más de las personas que componen las instituciones que de las propias instituciones en sí. Una posible

solución para tratar de evitar esta falta de coordinación sería la creación de gabinetes conjuntos, mesas de debate o algún otro mecanismo, en el cual intervinieran miembros de todos los recursos implicados en la materia. (Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Haro).

Por parte de distintos informantes se nos ha recalcado la importancia de esta comunicación transversal, remarcando que:

(...) implementar medidas interdisciplinarias, conlleva para las víctimas una mayor facilidad a la hora de interactuar con las administraciones, lo que podría suponerles mejoras importantes a la hora de pasar por este complicado proceso. Sería interesante formar a personal especializado en varias de estas áreas, y que pudieran apoyar y asesorar a las mujeres de manera individualizada desde un punto de vista global del problema. (Red Vecinal contra la Violencia de Género).

En la situación política actual, con el auge de determinados partidos que ponen en tela de juicio la validez de las leyes que protegen a las mujeres de sus maltratadores, o aquellos que fomentan bulos acerca de las cifras de denuncias falsas en materia de violencia de género, la sociedad debe dar, una vez más, un paso hacia adelante en su camino hacia la igualdad efectiva, tratando de no retroceder en el camino que tanto tiempo se ha ido recorriendo y que tanto esfuerzo nos está costando.²⁴

“Esto no es una guerra de hombres contra mujeres, sino de toda una sociedad contra unos tipos que son maltratadores, que no quieren la igualdad, que quieren dominar a una mujer porque hay una relación afectiva”.²⁵

²⁴ Fuente: Ministerio de Justicia. *Memoria de la Fiscalía General del Estado* (2018). Recuperado el 30/05/2019. Disponible en: https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MEMFIS18.PDF?idFile=f9e5ea88-f1f6-4d21-9c24-d2ffd93eabc3

²⁵ Fuente: Entrevista a la Fiscal de Sala para la Violencia sobre la Mujer. *El País* (25/11/2006). Recuperado el 30/05/2019. Disponible en: https://elpais.com/diario/2006/11/25/sociedad/1164409207_850215.html

9. BIBLIOGRAFÍA

- Alberdi, I. y Matas, N. (2002). *La violencia doméstica*. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. Barcelona: Ediciones Fundación La Caixa.
- Argüelles Blanco, A.R. y Fernández Villazón, L.A. (2016). *Medidas de inserción laboral y fomento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género*; en Romero Burillo, A.M (dir.) *La protección de la víctima de violencia de género. Un estudio multidisciplinar tras diez años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004*. Aranzadi. Navarra. págs.165-191.
- Arias Domínguez, A. (2008). *Protección laboral y de seguridad social de la violencia de género*, Universidad de Extremadura, Cáceres.
- Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea del año (18/12/2000). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (10/12/1984). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (18/12/1979). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (11/05/2011). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.
- Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas (20/12/1993). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Declaración Universal de Derechos Humanos (10/12/1948). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Fernández Montero, P. (2015). *Ya no tengo miedo*. Editorial Club Universitario.

- García Orts, Y. (2018). *Mejoras en la respuesta institucional ante la violencia de género: Fallos institucionales en los protocolos municipales de actuación*. Una mirada desde la perspectiva de género.
- Gardner, R. (1991). Legal and Psychaterapeutic Aproaches to the tree or parental alienation Syndrome Familiaes. Columbia. Court Review.
- Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género (2013). *Consejo General del Poder Judicial*
- Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. *Boletín Oficial del Estado*, 313.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. *Boletín Oficial del Estado*, 313.
- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *Boletín Oficial del Estado*, 77.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. *Boletín Oficial del Estado*, 71.
- Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. *Boletín Oficial del Estado*, 314.
- Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja. *Boletín Oficial de La Rioja*, 31.
- Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. *Boletín Oficial del Estado*, 53.
- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. *Boletín Oficial del Estado*, 101.
- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. *Boletín Oficial del Estado*, 183.

- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. *Boletín Oficial del Estado*, 245.
- Lorente Acosta, M. (2001). *Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer: realidades y mitos*. Ares y Mares, Editorial Crítica, Madrid.
- Manual de Naciones Unidas sobre legislación en materia de violencia contra la mujer (2012). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Martín Valverde, A. (2006). La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género: análisis jurídico e ideológico. *Revista Relaciones Laborales*, nº 22, págs.531- 564.
- Martínez Yáñez, N. (2012). *La protección de la víctima de violencia de género en el ET(I): reducción y reordenación del tiempo de trabajo*; en MELLA MÉNDEZ, L. (dir.) *Violencia de género y derecho del trabajo. Estudios actuales sobre puntos críticos, La Ley*. Madrid.
- Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. *Boletín Oficial del Estado*, 285.
- Orden 2/2006, de 31 de marzo, por la que se regulan los itinerarios de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y su acceso a la ayuda económica prevista en el RD 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. *Boletín Oficial de La Rioja*, 45.
- Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género (13/05/2019). *Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad*.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16/12/1966). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (03/01/1976). *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
- Programa Daphne III, aprobado en la Decisión 779/2007/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo (20/06/2007). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Protocolos de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. *Consejo General del Poder Judicial*.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social Estatuto de los Trabajadores. *Boletín Oficial del Estado*, 261.

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. *Boletín Oficial del Estado*, 69.

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. *Boletín Oficial del Estado*, 301.

Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. *Boletín Oficial del Estado*, 297.

Ruiz, M. A. B. (2014). Implicaciones del uso de las redes sociales en el aumento de la violencia de género en adolescentes. *Comunicación y medios*, pág 124.

Simón, M^a E. (2009). *Hijas de la igualdad, herederas de injusticias*. Madrid. Narcea.

Tratado de la Unión Europea. Maastricht (07/02/ 1992). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Velasco Portero, M.T. (2010). La acreditación de la condición de víctima de violencia de género como requisito necesario para ser titular de protección laboral. *Revista Doctrinal Aranzadi Social*.

Walker, L. (1979). La teoría del ciclo de la violencia (The battered Women).

10. ANEXOS